

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Medellín, febrero nueve (9) de 2023.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501220140075101, promovido por el señor **Juan Carlos Garrido Mejía** en contra de **Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario SA – FIDUAGRARIA SA** en calidad de vocera del **Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales** con la finalidad de revisar en consulta la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, el Veintitrés (23) de Noviembre del año dos mil Dieciséis (2016) en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **20**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala

.

ANTECEDENTES

El señor **Juan Carlos Mejía Garrido** solicitó mediante el presente proceso, se declare que desempeñó el cargo de médico especialista Grado 40 o en los grados descendentes hasta el 38 o el que se demuestre, y no como médico general Grado 36 desde el 16 de diciembre de 2005 y en lo sucesivo mientras dure la relación laboral en el Departamento de medicina laboral del Instituto de Seguros Sociales y que por ende, se le recategorice y reconozca: nivelación salarial, incrementos anuales, de salario por servicios prestados con descongelamiento por los años 2001 a 2011 y los causados con posterioridad de acuerdo al art 40 de la convención colectiva de trabajo, las primas de servicio legales y extralegales, prima técnica, prima de navidad, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías, cesantías, intereses a las cesantías, cesantías retroactivas liquidadas con descongelamiento y las causadas con posterioridad, sanción moratoria. Por ende, solicitó se reajuste de las cotizaciones en seguridad social, así como la prima de navidad. Solicitó si se abra la desvinculación del demandante en el transcurso del

proceso se procediera a su reintegro teniendo en cuenta la reclasificación aducida y subsidiario a ello, la indemnización convencional.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que desde el 3 de abril del año 1995 se encuentra vinculado mediante contrato de trabajo con el ISS, fue contratado para el cargo de médico General grado 36, pero, desde el 16 de diciembre del año 2005 inició a desarrollar funciones de Nivel Profesional y Especialista, con las mismas funciones, asignaciones y responsabilidad que otros empleados que cuentan con una asignación salarial superior en atención al grado 36 de su clasificación.

Expuso que pese a que tiene las funciones del cargo por más de 7 años, el título necesario de Médico Cirujano, título de Especialista en Gerencia de Salud Ocupacional, no ha sido posible que si empleador realice la correspondiente reclasificación de funciones. Argumentó que para el desempeño de sus actividades, tiene las funciones de evaluación médica a los afiliados y beneficiarios afiliados al fondo de pensiones del ISS, calificación de pérdida de capacidad laboral, prórroga de incapacidades por enfermedad común, revisión de personal médico, solicitudes de calificación ante las Juntas de Calificación de Invalidez, entre otras funciones, que son del nivel especialista y no, de médico general, sin embargo, su remuneración es muy por debajo de la que reciben los especialistas grado 40. Explicó que, mediante acuerdo firmado entre el sindicato y la demandada, se congelaron las liquidaciones de las cesantías retroactivas, los intereses sobre las cesantías y los incrementos por servicios prestados desde el año 2001 al año 2011, con el fin de salvar la entidad, sin embargo, la demandada incumplió firmando el Decreto liquidatorio 2013 de 2012. Argumentó que es beneficiario de la

convención colectiva de trabajo, que trae consigo, una cláusula de estabilidad laboral.

Admitida la demanda y notificada a la pasiva mediante auto del tres (3) de julio del año dos mil doce (2012), la accionada dio respuesta al libelo gestor indicando sobre los hechos narrados:

Manifestó que el actor ingresó a INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante contratos de prestación de servicios el 3 de abril de 1995, y en el año 2005 fue reintegrado mediante sentencia judicial, siempre ha desempeñado funciones de médico general, y que las funciones que el demandante argumenta cumplir fueron suprimidas con la entrada en vigencia del Decreto 2012.

Finalmente, se opuso a la prosperidad de las pretensiones e interpuso las excepciones que denomino: “Inexistencia de la obligación”, “ Violación con las pretensiones de la demanda al principio de igualdad de los trabajadores del Instituto que participaron en el proceso de promoción y ascenso”, “Violación con las pretensiones de la demanda del ordenamiento jurídico en cuanto a la creación, provisión y remuneración de cargos” “Inexistencia de la obligación de reconocer y pagar el reajuste de la liquidación de prestaciones sociales”, “ Inexistencia de la obligación de reconocer la indemnización moratoria”, “ pago de lo no debido”, “ prescripción”, “ compensación indexada”, “ imposibilidad de la condena en costas”.

En sentencia proferida el veintitrés (23) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), el juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, declaró probada de oficio la excepción de Cosa Juzgada, y por tanto, absolvió a Sociedad Fiduciaria de

Desarrollo Agropecuario SA – FIDUAGRARIA SA en calidad de vocera del Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones invocadas en su contra por el señor Juan Carlos Mejía Garrido.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta instancia, consiste en determinar si en el presente caso la conciliación celebrada entre las partes ante funcionario administrativo del trabajo, produce efectos de cosa juzgada como lo determino el *a quo*. De no ser así se determinará si el señor Juan Carlos Mejía Garrido tiene derecho o no a la reclasificación, en un grado superior al de Médico General grado 36 y de ser así, la procedencia de las condenas solicitadas.

CONSIDERACIONES

Dentro del margen del proceso, el juez, como director del proceso, tiene la facultad, de declarar, de oficio, una excepción que no haya sido propuesta por el extremo pasivo si advierte al momento de dar estudio al problema jurídico, que ésta puede salir adelante.

En cuanto a los elementos que caracterizan la cosa juzgada en los términos del artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral por remisión expresa del artículo 145 del código de procedimiento laboral, consiste en que un asunto a resolver verse sobre idéntico objeto a una situación ya resuelta por los mismos intervinientes.

La Sala de Casación Laboral en sentencia CSJ SL, 12 nov. 2003, rad. 20998, reiterada en la CSJ SL1364-2019, sostuvo:

El artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, acusado por la censura como indebidamente aplicado por el Tribunal, señala que para que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso anterior tenga fuerza de cosa juzgada, se requiere: 1) Que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto; 2) Que se funde en la misma causa del proceso anterior y, 3) Que haya identidad jurídica de las partes en ambos procesos (eadem conditio personarum)

“También se tiene dicho, que por regla, los jueces no pueden resolver por vía general, pues sus decisiones deben limitarse al caso concreto y con valor para el mismo, razón por la cual la cosa juzgada tiene dos límites, a saber:

“1) El objetivo. Referido a la cosa sobre la que versó el proceso anterior y, a la causa petendi. El primero constituido por el derecho reconocido, declarado o modificado por la sentencia, en relación con una cosa o varias determinadas, o la relación jurídica declarada, pues sobre la misma cosa pueden existir diversos derechos y, tenerse el mismo derecho sobre diferentes cosas, de tal manera que si falta identidad del derecho o de la cosa, se estaría en presencia de distintos litigios y pretensiones. En torno al segundo límite, se refiere al fundamento alegado para conseguir el objeto de la pretensión contenida en la demanda, que al mismo tiempo equivale al soporte jurídico de su aceptación o negación por el juzgador en la sentencia y,

“2) Límite subjetivo, relativo a las personas que han sido parte en ambos procesos.

“De tal manera que si se presenta identidad de objeto, pero varía la causa petendi, no existe identidad objetiva en los dos procesos, mucho menos si no hay identidad de objeto y causa, lo cual, indiscutiblemente significa que tampoco se estará en presencia del fenómeno de la cosa juzgada.

Ahora, el Juez como titular del proceso cuenta con la facultad de, reconocer o declarar la cosa juzgada, pese a la inactividad de la demandada en ello es decir, pese a que no sea interpuesta como excepción, o si es nuevo hecho que nace en el

transcurso del proceso, situación, que de manera pacífica ha reconocido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencias, como 39366 de 23 de octubre del año 2012, en donde expresó:

“Pero para que la cosa juzgada adquiriera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.

La cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica anunciados, así como puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo umbral del proceso a través de las llamadas excepciones previas que por sabido se tiene tienden a impedir el adelantamiento irregular del proceso, también puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil --artículo 282 del nuevo Código General del Proceso--, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que concede al juzgador dicha posibilidad, salvo las consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas, no puede entenderse derogado por la vigencia del artículo 66 A del código procedimental últimamente citado. Por manera que, en cuanto a dicha alegación no asiste razón alguna a los recurrentes, dado que, como se ha asentado, la cosa juzgada interesa al orden público y, por tanto, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, aún, de oficio. “.

Es por ello, que, ante la configuración de ésta, el juzgador esta en plena capacidad de declararle de oficio. Es importante también precisar, la fuerza vinculante de los acuerdos conciliatorios, dentro de la especialidad que nos atañe.

Para la especialidad laboral, la conciliación, es un ejercicio de autocomposición que busca resolver las diferencias surgidas del contrato de trabajo, efectuando entre las partes concesiones mutuas, que para su validez y eficacia quedan sujetos a los requisitos del artículo 1502 del CC, es decir, es un método preventivo y solucionador de conflicto cuyos límites son los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador, y por su calidad de tal, es susceptible de ser negociado, como en el caso que nos ocupa, que no se discute ningún derecho cierto ni discutible del trabajador. La Sala Laboral explicó en sentencia 63129 de 2019 lo siguiente:

«Sin embargo, en este campo, ese ejercicio preventivo y solucionador de conflictos, tiene límites en el respeto a los derechos mínimos, ciertos e indiscutibles del trabajador, entendidos aquellos, como los que se han configurado por haberse cumplido los supuestos de hecho que determinan las normas que los consagran, por lo que para que pierda esa connotación, esto es, que un derecho sea discutible, y por ende susceptible de ser negociado, no basta con que el empleador lo cuestione en el llamado judicial, de manera tal que cualquier beneficio o garantía pueda ser renunciado por el trabajador, so pretexto de que el empleador controvierta su nacimiento, por lo que, se ha señalado, que «...un derecho será cierto, real, innegable, cuando no haya duda sobre la existencia de los hechos que le dan origen y exista certeza de que no hay ningún elemento que impida su configuración o su exigibilidad...» (CSJ SL, 14 dic. 2007, rad. 29332 y CSJ SL4464-2014, entre otras).».

Precisamente por ser un acto jurídico entre las partes, requiere que no existan vicios en el consentimiento, no se violen normas de orden público y se efectúen ciertas renunciaciones entre las partes con el fin de encontrar un punto medio para la solución del conflicto, punto en que ambos consideren satisfecho el derecho en controversia.

Descendiendo al caso de autos, se tiene que, de manera posterior a la presentación de la demanda, el señor Juan Carlos Mejía Garrido, se reunió con su empleador con la intención de finalizar la relación laboral que los unía y saldar entre ambos las acreencias que se consideraban tener. Dicha reunión tuvo lugar el 30 de diciembre del año 2014 ante el Ministerio del Trabajo, y en donde puede leerse la voluntad de las partes así:

“2)CONCILIAR, los DERECHOS INCIERTOS Y DISCUTIBLES que hubieran podido generarse durante la relación laboral que aquí termina, por la suma total y única de \$433.484.395.00.

3)Las partes dejan constancia que se anexa a esta Acta copia de la liquidación definitiva de las prestaciones sociales, las cuales no son objeto de conciliación por tratarse de derechos CIERTOS Y DISCUTIBLES, frente a los cuales solo se estipulará la forma de pago al trabajador y la suma conciliatoria aceptada por el trabajador oficial, \$325.604.030.00

4)Por lo anterior, las partes manifiestan su voluntad de ratificar la terminación de común acuerdo de la relación laboral, mediante el pago de la suma única conciliatoria por valor de \$325.604.030.00, mencionada en el numeral anterior, conforme a los términos y condiciones establecidos en la resolución 3473 del 24 de noviembre de 2014 y aceptados por el trabajador oficial....

....

Por lo anterior el trabajador oficial manifiesta estar de acuerdo con los términos del presente acuerdo, plazos, cuantías, y pagos aquí estipulados declarando totalmente a PA Y SALVO al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN, frente a

derechos INCIERTOS Y DISCUTIBLES en especial en cuanto a la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo”.

El acta suscrita, firmada por la parte actora y allegada por la pasiva, presta mérito ejecutivo pues contiene una obligación clara que podría ser ejecutada judicialmente, y claro está resuelve el objeto del presente proceso, pues como se indicó con antelación, los derechos reclamados por el señor MEJÍA GARRIDO en el de marras son derechos inciertos y discutibles, que innegablemente fueron objeto de la conciliación referida, quedando en manos de la Juez de primera instancia, declarar probada de oficio la Excepción de Cosa Juzgada ante la auto resolución del conflicto por las partes.

Sin costas en esta instancia, dado que el proceso se revisa vía grado jurisdiccional de consulta.

Es por ello, que es acertada la decisión tomada por la juez de primera instancia y deberá confirmarse,

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, por las razones antes expuestas.

05001310501220140075101

Acta 20

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0ae1b3ced84f93df323bd13ac591bc3ac498e1e64dc1c5a8421231981c9adaa7**

Documento generado en 09/02/2023 02:14:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>